



ANEXO N° 1

COMENTARIOS AL PROYECTO DE RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS TARIFAS TOPE DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE FORMA PARTE DE LOS PROYECTOS REGIONALES DE BANDA ANCHA Y CONECTIVIDAD INTEGRAL

A continuación se remite nuestros comentarios, observaciones y sugerencias preliminares al Proyecto de “RESOLUCIÓN QUE ESTABLECE LAS TARIFAS TOPE DEL SERVICIO DE ACCESO A INTERNET QUE FORMA PARTE DE LOS PROYECTOS REGIONALES DE BANDA ANCHA Y CONECTIVIDAD INTEGRAL”, publicado mediante la Resolución N° 217-2022-CD/OSIPTEL en adelante el “Proyecto”, en marco del Contrato de Financiamiento del Proyecto de “Instalación de Banda Ancha para la Conectividad Integral y Desarrollo Social de la Región Lima”, suscrito entre el PRONATEL y América Móvil Perú S.A.C con fecha 19 de marzo del 2018 (en adelante, “Proyecto Regional Lima”).

COMENTARIOS GENERALES:

1. No existe sustento legal para la intervención regulatoria sobre el Régimen Tarifario

Según la Constitución Política del Perú, el Estado puede limitar la actuación de los individuos en el mercado; no obstante, cualquier limitación sólo puede darse si existen razones reconocidas constitucionalmente que puedan justificar dicha intervención.

El artículo 58¹ de la Constitución Política dispone que la iniciativa privada es libre y se ejerce en el marco de una economía social de mercado, consagrando el derecho de propiedad, libre contratación, libertad de empresa e iniciativa privada, así como la limitación de la participación del Estado en la economía. En la misma línea, el artículo 62² de la Constitución garantiza la libertad de contratar indicando que los términos contractuales **no pueden ser modificados unilateralmente** por ninguna disposición.

En concordancia con lo anterior, la actuación reguladora del Estado debe ser de carácter supletorio, según ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Constitucional en la Resolución No. 0008-2003-AI: **“toda regulación estatal debe justificarse por la presencia de una falla del mercado**, es decir, por una situación en la que el libre juego de la oferta y la demanda y el régimen de libre competencia impidan alcanzar una asignación eficiente de recursos, lesionando intereses públicos.”

El Tribunal Constitucional también ha señalado que la Constitución habilita al Estado a intervenir excepcionalmente en la economía, con la finalidad de garantizar el correcto funcionamiento de los mercados y también con el objetivo de que determinados

¹ **Artículo 58.- Economía Social de Mercado**

La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura.

² **Artículo 62.- Libertad de contratar**

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.



segmentos de la población menos favorecidos accedan a bienes y servicios garantizados por la Constitución³.

Esto significa que **corresponde al Estado justificar la constitucionalidad y la razonabilidad de su intervención**. La carga de probar que la regulación es necesaria y razonable⁴ es de quien pretende regular y no de quien va a quedar sujeto a dicha regulación. En consecuencia, corresponde a la autoridad acreditar la efectiva existencia de una falla de mercado y la inexistencia de mecanismos alternativos (menos costosos) para darle solución.

Respecto a cuándo se considera razonable una intervención regulatoria, una definición de este principio se encuentra en el numeral 1.4 del artículo IV del Título Preliminar del Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General (en adelante, la LPAG), aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, el cual señala:

“Artículo IV.- Principios del Procedimiento Administrativo

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:

(...)

1.4. Principio de razonabilidad.- Las decisiones de la autoridad administrativa, cuando creen obligaciones, califiquen infracciones, impongan sanciones, o establezcan restricciones a los administrados, deben adaptarse dentro de los límites de la facultad atribuida y manteniendo la debida proporción entre los medios a emplear y los fines públicos que deba tutelar, a fin de que respondan a lo estrictamente necesario para la satisfacción de su cometido”.⁵

En ese sentido, el Proyecto no presenta una justificación válida para la intervención estatal, en la medida que no existe evidencia empírica que demuestre que el mercado de internet presente una falla de mercado, de modo que la intervención señalada en el Proyecto respecto al establecimiento de una tarifa tope del servicio de acceso a Internet para abonados distintos a las instituciones públicas correspondiente a los Proyectos

³ Sentencia No. 0034-2004-AVTC del Tribunal Constitucional: “33. De este modo, conforme a lo señalado en los párrafos anteriores, no cabe duda que el Estado puede intervenir de manera excepcional en la vida económica de los particulares, a fin de garantizar bienes constitucionales que pueden ponerse en riesgo por las imperfecciones del mercado y respecto de los cuales existe un mandato constitucional directo de promoción en tanto actividad y/o protección del grupo menos favorecido.”

⁴ El Tribunal Constitucional ha planteado en la sentencia 2868-2004-AA que el principio de proporcionalidad o razonabilidad es un parámetro correcto para evaluar la actuación de los reguladores: “El Tribunal Constitucional ha establecido que el principio de proporcionalidad es un test o canon de valoración para evaluar actos estatales que inciden sobre derechos subjetivos [constitucionales o simplemente legales]. Se trata de una técnica a partir de la cual un tribunal de justicia puede evaluar si la intromisión estatal en el ámbito de los derechos resulta, o no, excesiva”. [Énfasis agregado]

⁵ Refiriéndose a este principio, Reynaldo Bustamante señala:

“Por otro lado, la exigencia de proporcionalidad, como segundo parámetro de razonabilidad, exige que los medios empleados para alcanzar el fin perseguido sean necesarios, adecuados y proporcionados, es decir, que además de ser imprescindibles para alcanzarlo, exista una adecuada correspondencia, armonía o proporción entre la limitación, regulación o decisión y el fin que pretende alcanzarse. Conforme a ello, el análisis de proporcionalidad de la norma o decisión involucrada debe efectuarse tanto desde la perspectiva del bien o valor que tutela, como desde la perspectiva del bien o valor que limita o lesiona. (...) Esto significa que, aún en el caso que se requiera proteger un interés público, ésta sola circunstancia no sería suficiente para justificar, sin más, el sacrificio de un derecho (...)”



Regionales (hogares), estaría considerada como contraria al marco constitucional y legal.

Sin perjuicio de ello, incluso en el supuesto que se considerase que existe una justificación para regular, la forma de la intervención regulatoria no se adecua al principio de proporcionalidad, pues el Proyecto plantea una limitación indebida a la libertad empresarial al pretender modificar unilateralmente los Contratos de financiamiento firmados con las empresas operadoras, como es el caso de nuestra representada con el Proyecto Regional de Lima. Cabe señalar que dicha intervención regulatoria que se supone estaría acotada a solo aquellos abonados beneficiados de los Proyectos Regionales implicaría una regulación indirecta al régimen tarifario del mercado de internet en general, el cual podría tener como resultado detener el dinamismo presentado en dicho mercado en los últimos años, en términos de avance tecnológico, producto de una menor competencia.

Lo anterior determina que la actuación del OSIPTEL a través de lo señalado en el Proyecto pueda ser considerado como una **barrera burocrática**, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo No. 1256, Ley de Prevención y Eliminación de Barreras Burocráticas (en adelante, la Ley de Barreras Burocráticas).

1.1. La regulación tarifaria del mercado de internet es contraria a la Constitución

El artículo 62° de la Constitución dispone que "los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase". De acuerdo con el Tribunal Constitucional, esta norma establece un límite a la potestad normativa del Estado, en virtud del cual la ley –y, eventualmente, otras fuentes formales de derecho– no pueden utilizarse para modificar el contenido de un contrato.

En ese sentido, la propuesta regulatoria busca modificar, en forma unilateral el Contrato de Financiamiento con las empresas operadoras que ganaron las licitaciones de los Proyectos Regionales, ello constituye en una vulneración a lo establecido por el artículo 62° de la Constitución, dicha vulneración resulta particularmente grave si se considera que la medida planteada no sería siquiera aprobada a través de una Ley sino por medio de una norma de rango infra legal.

1.2. El OSIPTEL pretende regular tarifas violando el marco legal existente

De acuerdo con el Principio de Legalidad, previsto en el Título Preliminar de la LPAG, las autoridades deben actuar en el marco de sus facultades, respetando la Constitución y las leyes, así como los fines para los cuales le fueron conferidas tales facultades⁶. En ese sentido, el OSIPTEL debe ejercer sus facultades para realizar un determinado acto

⁶ **1.1. Principio de legalidad.** - Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. Por su parte, el artículo 86 de la LPAG señala lo siguiente:

Artículo 86.- Deberes de las autoridades en los procedimientos

Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes, los siguientes:

*1. Actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que les fueron conferidas sus atribuciones.
2. Desempeñar sus funciones siguiendo los principios del procedimiento administrativo previstos en el Título Preliminar de esta Ley (...)*



en el marco de los principios de legalidad y razonabilidad, dentro los límites legales previstos para dicha intervención.

Al respecto, tenemos a bien mencionar que el OSIPTEL estaría excediendo sus competencias, produciéndose una infracción al principio de legalidad, ya que el Proyecto pretende **una regulación de tarifas tope no autorizada según el marco legal del sector telecomunicaciones**, en específico el mercado del servicio de internet.

El Reglamento General del OSIPTEL, aprobado mediante Decreto Supremo N° 008-2001-PCM, establece que la función normativa faculta al OSIPTEL a dictar “*reglamentos y normas de carácter general*” referidos -entre otros asuntos- a “*sistemas tarifarios o regulatorios o mecanismos para su aplicación*”. Sin embargo, la facultad otorgada por el marco legal al OSIPTEL para dictar normas de carácter general referidas a sistemas tarifarios no constituye una habilitación legal abierta para establecer tarifas en cualquier mercado de telecomunicaciones. Muy por el contrario, el marco legal establece supuestos específicos que deben verificarse para que los organismos reguladores en general y el OSIPTEL en particular puedan regular las tarifas.

Por su parte, el artículo 77° del Texto Único Ordenado de la Ley de Telecomunicaciones (en adelante, el TUO de la Ley de Telecomunicaciones), aprobado a través del Decreto Supremo No. 013-93-TCC, señala una de las funciones fundamentales del OSIPTEL: “*fixar las tarifas de servicios públicos de telecomunicaciones y establecer las reglas para su correcta aplicación*”.

Sin perjuicio de lo anterior, el artículo 67° del mismo cuerpo normativo establece que el OSIPTEL “***puede optar por no establecer tarifas topes cuando por defecto de la competencia entre empresas se garantice una tarifa razonable en beneficio del usuario***”. De igual manera, el artículo 8° de la Ley No. 26285 enumera, entre las funciones del OSIPTEL, “*fixar los sistemas de tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones, creando condiciones tarifarias que sean compatibles con la existencia de competencia*”.

Sobre la base del marco legal antes descrito, en el Reglamento General del OSIPTEL se ha establecido que la función reguladora “*es la facultad que tiene OSIPTEL de fixar tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones*” y, asimismo, que “*en ejercicio de la función reguladora el OSIPTEL fijará tarifas, establecerá sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades, y dictará las disposiciones que sean necesarias para tal efecto*”⁷. En forma complementaria, el artículo 4 del Reglamento General de Tarifas, aprobado mediante Resolución N° 060-2000-CD/OSIPTEL (en adelante, “Reglamento de Tarifas”), establece que el OSIPTEL “*posee la potestad para suprimir la regulación tarifaria en los casos en que verifique la existencia de condiciones de competencia efectiva y la regulación ya no resulte necesaria*”.

⁷ Reglamento General del OSIPTEL:

“Artículo 28.- Función Reguladora.

Es la facultad que tiene OSIPTEL de fixar tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones.

(...)

Artículo 30.- Alcances de la Función Reguladora.

En ejercicio de la función reguladora el OSIPTEL fijará tarifas, establecerá sistemas tarifarios en sus diferentes modalidades, y dictará las disposiciones que sean necesarias para tal efecto.”



En atención a lo anterior, el Reglamento de Tarifas ha establecido que la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones podrá estar sujeta a dos regímenes tarifarios: el Régimen Tarifario Supervisado y el Régimen Tarifario Regulado. Al respecto, el artículo 9° establece lo siguiente:

“Artículo 9.- Regímenes tarifarios

La prestación de servicios públicos de telecomunicaciones podrá estar sujeta a los siguientes regímenes tarifarios:

1. Régimen Tarifario Supervisado: *Régimen tarifario bajo el cual las empresas operadoras pueden establecer y modificar libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin estar sujetas a tarifas tope, y determinándolas únicamente de acuerdo con la oferta y la demanda.*

Este régimen es aplicable de manera general a la prestación de los servicios públicos de telecomunicaciones, sin perjuicio de la aplicación del Régimen Tarifario Regulado, de la normativa legal y contractual vigente y de las facultades de supervisión que le corresponden a OSIPTEL.

2. Régimen Tarifario Regulado: *Régimen tarifario bajo el cual las empresas concesionarias pueden fijar y modificar libremente las tarifas de los servicios públicos de telecomunicaciones que presten, sin poder exceder las tarifas topes que hayan sido fijadas en sus respectivos contratos de concesión o en las resoluciones tarifarias emitidas por OSIPTEL conforme a lo previsto en el presente reglamento.*

Este régimen es aplicable de manera exclusiva a la prestación de servicios públicos de telecomunicaciones por parte de empresas concesionarias, de acuerdo a lo dispuesto en los contratos de concesión y en las resoluciones tarifarias, sin perjuicio de la aplicación de la normativa legal y contractual vigente y de las facultades de supervisión que le corresponden a OSIPTEL”. [Énfasis agregado]

Tal como se desprende de lo dispuesto en el artículo 9 citado del Reglamento de Tarifas, en el Régimen Tarifario Supervisado la empresa es libre de establecer las tarifas por los servicios de telecomunicaciones que preste, en función de la oferta y la demanda. Este régimen será de aplicación general a los servicios de telecomunicaciones de mercados considerados como **competitivos**.

Mientras que bajo el Régimen Tarifario Regulado, las empresas operadoras podrán establecer libremente sus tarifas, debiendo respetar y no exceder las tarifas topes que hubieran sido fijadas en las resoluciones tarifarias del Regulador o los respectivos contratos de concesión. Por tanto, bajo el Régimen Tarifario Supervisado, el **OSIPTEL no puede establecer tarifas a los servicios prestados por los operadores**. Sólo puede establecer sistemas de tarifas, entendidos como las reglas para la aplicación de las tarifas que hubieran sido libremente establecidas por las empresas operadoras.



Tomando en cuenta los límites a las facultades del OSIPTEL que se derivan de cada uno de estos regímenes tarifarios, el artículo 32° del Reglamento de Tarifas ha desarrollado de forma específica los supuestos en los que se encontraría habilitado a fijar tarifas topes. Dicho artículo señala expresamente:

“Artículo 32.- Casos en los que OSIPTEL puede fijar tarifas topes

OSIPTEL podrá disponer la fijación, revisión o ajuste de tarifas tope para servicios públicos de telecomunicaciones prestados por empresas concesionarias, cuando lo considere necesario a fin de crear las condiciones tarifarias adecuadas para el desarrollo de los servicios públicos de telecomunicaciones, garantizando la calidad y eficiencia económica, en los siguientes casos:

- 1. Cuando se sustente en la aplicación de disposiciones y criterios tarifarios estipulados en los contratos de concesión. En estos casos, la resolución tarifaria será aplicable a la empresa titular de los respectivos contratos de concesión.***
- 2. Cuando se trate de mercados de servicios donde existan operadores dominantes. En estos casos, la resolución tarifaria será aplicable a la empresa concesionaria respecto de la cual se haya determinado que goza de una posición de dominio en el mercado.***
- 3. Cuando se trate de mercados en los que no exista una competencia efectiva. En estos casos, la resolución tarifaria será aplicable a las otras empresas concesionarias del respectivo mercado, además de las comprendidas en los incisos precedentes”. [Énfasis agregado]***

Entonces, los únicos supuestos (distintos a los expresamente establecidos en un contrato de concesión) que habilitarían al OSIPTEL a fijar tarifas topes **son la ausencia de competencia y la presencia de un operador dominante**. Cualquier regulación de tarifas que no se encuentre debidamente justificado en alguno de los supuestos identificados sería **ilegal**.

Lo anterior implica que, a través de su Proyecto, el OSIPTEL está determinando la aplicación de tarifas tope para el servicio de internet ofrecido a hogares correspondientes a los Proyectos Regionales (regulación directa) y aquellos abonados que no se ven beneficiados de los Proyectos Regionales (regulación indirecta), pues dicha tarifa tope regulada de S/ 31.73 (sin IGV) para un servicio con velocidad de descarga de 12 Mbps constituiría una referencia de precio del mercado de internet que se encuentra bajo el régimen tarifario supervisado, afectando fuertemente el nivel de competencia del mercado de internet, tanto a nivel de avance tecnológico, calidad, cobertura y precio, pues reduciría los incentivos de las empresas operadoras a seguir invirtiendo en promover y cerrar la brecha digital a través de la prestación del servicio de internet.

En ese sentido, consideramos que el Proyecto es contrario al marco legal vigente, incluyendo a la normativa del propio OSIPTEL, ya que no se ha cumplido con acreditar que nos encontremos en alguno de los supuestos que lo habilitarían a fijar tarifas topes para los servicios en cuestión.



1.3 Modificación unilateral del Contrato de Financiamiento

En línea con lo señalado previamente, respecto a que, el artículo 62⁸ de la Constitución garantiza la libertad de contratar indicando que los términos contractuales **no pueden ser modificados unilateralmente** por ninguna disposición; es que, en el presente caso, AMÉRICA MÓVIL PERÚ suscribió el Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Lima bajo la buena fe contractual y con los términos que fueron previamente evaluados entre las partes.

En este punto, es necesario indicar que, OSIPTEL no puede pretender modificar los términos contractuales ya establecidos en el Anexo 8-B de las Bases del Contrato de Financiamiento, tal como mostramos a continuación:

- Si bien para el caso de las tarifas de servicios aplicables a las Instituciones Abonadas Obligatorias y otras Instituciones Públicas (entiéndanse las del REDNACE), está expresamente indicado que son **tarifas topes, con lo cual nos encontramos bajo el ámbito de un régimen regulado para este caso.**
- Sin embargo, en el mismo Anexo 8-B, se establece que, ***las tarifas de acceso a Internet para hogares serán determinadas por el CONTRATADO y están sujetas al régimen tarifario supervisado, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 2° de la Resolución del Consejo Directivo N° 004-2015-CD/OSIPTEL.***

Así las cosas, reiteramos, OSIPTEL NO PUEDE DESCONOCER lo expresamente pactado en los Contratos de Financiamiento suscritos para la ejecución de los Proyectos Regionales de Banda Ancha, con el fin de establecer tarifas topes de servicios de acceso a Internet para abonados distintos a Instituciones Públicas y, de esta manera brindar una tarifa asequible a la población, siendo que, el mismo OSIPTEL debe buscar otro tipo de soluciones sin vulnerar el derecho de las partes que suscribieron los Contratos de Financiamiento.

2. **No existe un problema que amerite la intervención regulatoria en el Régimen Tarifario aplicable para hogares**

Este tipo de intervención regulatoria que implica un cambio de Régimen tarifario va en contra de las funciones principales del regulador, pues el OSIPTEL debe buscar mantener las condiciones de competencia en el mercado y asegurar la calidad de los estándares técnicos, sin necesidad de regular precios, ya que la libertad tarifaria es pro-competitiva y ello se refleja en el aumento del bienestar social.

⁸ **Artículo 62.- Libertad de contratar**

La libertad de contratar garantiza que las partes pueden pactar válidamente según las normas vigentes al tiempo del contrato. Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase. Los conflictos derivados de la relación contractual sólo se solucionan en la vía arbitral o en la judicial, según los mecanismos de protección previstos en el contrato o contemplados en la ley.

Mediante contratos-ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente, sin perjuicio de la protección a que se refiere el párrafo precedente.



La libertad tarifaria a través de un Régimen tarifario supervisado es beneficiosa para la competencia dentro del mercado y no provoca que los servicios de telecomunicaciones se vuelvan inasequibles. Asimismo, la liberalización contribuye a la innovación, al mismo tiempo que genera beneficio económico y favorece a los consumidores a través de la aparición de alternativas más competitivas, tal como se ha experimentado en el mercado del servicio público móvil.

Según el OSIPTEL, la intervención regulatoria sobre el cambio de Régimen tarifario para el mercado de internet ofrecido a hogares correspondiente a los Proyectos Regionales se encuentra sustentado por (i) la aplicación de tarifas excesivas de la empresa Gilat Networks S.A.C. (en adelante, "Gilat") en Apurímac, Ayacucho, Huancavelica y Cusco, los cuales no son comparables con las ofertas comerciales vigentes en el mercado de Internet fijo; (ii) Monopolios naturales, ya que los Proyectos Regionales tienen presencia en localidades sin acceso a internet; (iii) Ausencia de conexiones de internet de la empresa Gilat en Apurímac, Ayacucho y Huancavelica; y (iv) el poder de mercado de Gilat.

Dicho análisis realizado por el OSIPTEL no corresponde a una justificación que se encuentra acorde con lo señalado en el artículo 32 del Reglamento de Tarifas, el cual indica que el OSIPTEL puede fijar tarifas (exceptuando el caso que sea señalado en los Contratos de concesión) *"cuando se trate de mercados de servicios donde existan operadores dominantes"* o *"cuando se trate de mercados en los que no exista una competencia efectiva"*.

Al respecto, en ninguna parte del Informe se ha demostrado explícitamente que existe poder de mercado de las concesionarias que tienen adjudicado algún Proyecto Regional ni tampoco se ha demostrado que todos los mercados de internet que corresponden a los Proyectos Regionales poseen fallas de mercado, pues el único análisis que el regulador ha considerado es la oferta comercial registrada en el SIRT por la empresa Gilat y la ausencia de conexiones de internet de la misma empresa en las zonas donde ha ganado licitaciones de los Proyectos Regionales, es decir, la intervención regulatoria que plantea el Proyecto no se encuentra debidamente motivada ni justificada y tampoco es proporcional a la supuesta problemática identificada (con la empresa Gilat).

En ese sentido, el análisis de dominancia desarrollado en el Informe es incorrecto, no se ha demostrado que existen fallas de mercado que justifiquen una intervención a nivel nacional ni a nivel regional, de modo que la premisa para la intervención regulatoria es equivocada y la dimensión del supuesto problema no justifica una intervención. Por tal motivo, consideramos que en caso se decida regular las tarifas para hogares correspondientes a los Proyectos Regionales, ello será una intervención regulatoria ineficaz e ineficiente en perjuicio de la sociedad, pues limitará la competencia al no brindar incentivos comerciales a las empresas operadoras para entrar en los mercados donde actualmente no existe el servicio y distorsionará el nivel de competencia en los mercados donde hay pocos operadores compitiendo libremente.

Es por ello que resulta muy importante que en la norma que finalmente sea aprobada no se modifique el Régimen tarifario del mercado asociado a la prestación del servicio de internet a los hogares correspondientes a los Proyectos Regionales, es decir, no se debe



fijar tarifas tope para este mercado ni establecer un Régimen tarifario regulado, pues no solo constituye una acción ilegal, tal como se ha señalado en la sección anterior, sino que tampoco incentiva a que las empresas operadoras sigan participando de futuras licitaciones como los Proyectos Regionales y tampoco promueve a que otras empresas operadoras ingresen a dichas localidades, ya que ingresar a dichas zonas significaría un elevado costo hundido y por ende un margen de ganancia reducido asociado a la tarifa regulada. Además, este mecanismo de intervención regulatoria a través de la fijación de tarifas a usuarios finales brinda señales de incertidumbre al mercado y puede ocasionar que las inversiones proyectadas por las empresas operadoras se paralicen.

3. Las tarifas para el servicio de acceso a internet a hogares correspondiente a los Proyectos Regionales no cubren costos

La determinación de la tarifa calculada no se encuentra adecuadamente desarrollada, pues no se ha realizado un análisis detallado que considere todos los costos en los que incurre una empresa para poder llevar el servicio de internet a las localidades que comprenden los Proyectos Regionales, más aun considerando que algunas de ellas pertenecen a zonas rurales muy remotas y/o de muy difícil acceso, ocasionando que el costo de instalación, operación y mantenimiento de la prestación del servicio sea elevado, situación que se agrava aún más teniendo en cuenta que la escasa población y la baja capacidad adquisitiva en dichas localidades no permite generar suficientes ingresos para poder cubrir sus propios costos operativos, lo cual resulta insostenible financieramente en el tiempo.

Según el Proyecto, la tarifa tope del servicio de acceso a Internet para hogares correspondiente a los Proyectos Regionales sería de S/. 31.73 por un plan de 12 Mbps, valor que es muy bajo y no cubre los costos derivados de la obligación de utilizar la RDNFO (USD 23, sin IGV) y del valor propuesto para la Red de Transporte de los Proyectos Regionales (USD 2.74, sin IGV). Considerando solo aquellos 2 costos se tiene un total de USD 25.74 por Mbps. En ese sentido, para un Plan tarifario de 12 Mbps, el cual requiere de un flujo constante de al menos 1 Mbps, solo el costo de ambos inputs es lejanamente mayor a la tarifa tope planteada en el Proyecto (Costo: USD 25.74 > Tarifa Tope: S/. 31.73).

En atención a ello, incluso utilizando la misma maqueta propuesta para la regulación tarifaria del servicio de acceso para las instituciones públicas y asignando los valores correspondientes al servicio de transporte de la RDNFO (USD 23, sin IGV) y de los Proyectos Regionales (USD 2.74, sin IGV), se tiene como resultado que para poder brindar un plan tarifario de 12 Mbps, la tarifa mínima que “correspondería” se encuentra alrededor de 250 soles, es decir, definitivamente la propuesta de tarifa tope de S/. 31.73 no cubre los costos mínimos que el propio regulador estaría reconociendo que son aplicables para la regulación tarifaria de la tarifa correspondiente a las instituciones públicas, tal como se puede ver en las siguientes tablas:



Proyecto Regional Apurímac	
Componentes	12 Mbps
Salida internacional (en US\$)	9.78
Transporte - RDNFO (en US\$)	45.28
Transporte - Proyecto regional (en US\$)	5.39
Costo variable por conexión (en US\$)	2.36
Tasas de aporte y explotación (en US\$)	1.28
Costo total por el servicio (en US\$)	64.11
Tarifa tope sin IGV (en S/)	250.40
Tarifa tope con IGV (en S/)	295.48

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Proyecto Regional Ayacucho	
Componentes	12 Mbps
Salida internacional (en US\$)	9.78
Transporte - RDNFO (en US\$)	45.28
Transporte - Proyecto regional (en US\$)	5.39
Costo variable por conexión (en US\$)	2.64
Tasas de aporte y explotación (en US\$)	1.29
Costo total por el servicio (en US\$)	64.39
Tarifa tope sin IGV (en S/)	251.52
Tarifa tope con IGV (en S/)	296.80

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.



Proyecto Regional Huancavelica	
Componentes	12 Mbps
Salida internacional (en US\$)	9.78
Transporte - RDNFO (en US\$)	45.28
Transporte - Proyecto regional (en US\$)	5.39
Costo variable por conexión (en US\$)	2.16
Tasas de aporte y explotación (en US\$)	1.28
Costo total por el servicio (en US\$)	63.90
Tarifa tope sin IGV (en S/)	249.60
Tarifa tope con IGV (en S/)	294.53

Resto de Proyectos Regionales	
Componentes	12 Mbps
Tarifa tope sin IGV (en S/)	250.51
Tarifa tope con IGV (en S/)	295.60

Parámetros utilizados	Valores
- Ratio de contención	16%
Ratio de simultaneidad	25%
Velocidad Mínima Garantizada (promedio)	66%
- Precio por salida internacional (US\$ por Mbps)	4.97
- Precio por transporte - RDNFO (US\$ por Mbps)	23.00
- Precio por transporte - Proyecto regional (US\$ por Mbps)	2.74
- Costo de mantenimiento por terminal (en US\$)	
Apurímac	2.36
Ayacucho	2.64
Huancavelica	2.16
- Tasa de aporte al Pronatel	1.00%
- Tasa de aporte al Osiptel	0.50%
- Tasa de explotación comercial al MTC	0.50%
- Tipo de cambio periodo jul. 2021-jun. 2022 (S/ por US\$)	3.91

Fuente: OSIPTEL. Elaboración propia.

Es por ello que consideramos muy importante que en la norma que finalmente sea aprobada no se regulen las tarifas para el servicio de acceso a internet a los hogares correspondientes a los Proyectos Regionales que actualmente se encuentran bajo un régimen tarifario supervisado. Muy por el contrario, creemos que a fin de garantizar que las empresas operadoras puedan seguir desplegando su cobertura de internet a las localidades lejanas, se debe **brindar los incentivos suficientes para que las empresas opten por utilizar los servicios de la RDNFO y las Redes de Transporte de los Proyectos Regionales a través**



de la reducción de sus tarifas, lo cual se verá traducido en un menor costo al momento de determinar las tarifas para los usuarios finales.

COMENTARIOS ESPECÍFICOS:

Artículo del Proyecto de Resolución					Comentario
Artículo 1.- Establecer las tarifas tope del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas, correspondiente a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral, en los siguientes términos:					Con respecto al establecimiento de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas, correspondiente a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral (en adelante, Proyectos Regionales), se analizó el Informe N° 00200-DPRC/2022 (en adelante, Informe 200), a fin de conocer cómo se evaluó la obtención de las tarifas presentadas encontrándose las siguientes observaciones:
Velocidad de descarga (Mbps)	Renta Mensual (S/ sin IGV)				
	Proyecto Regional				
	Apurímac	Ayacucho	Huancavelica	Resto	
2	15.92	17.04	15.12	16.03	
4	22.42	23.54	21.62	22.53	
8	35.42	36.54	34.62	35.53	
10	41.92	43.04	41.12	42.03	
12	48.42	49.54	47.62	48.53	
20	74.42	75.54	73.62	74.53	
40	139.42	140.54	138.62	139.53	

(...)

1.- A lo largo del Informe 200 se hace referencia a que el pago que corresponde por el transporte de datos a nivel de la Red Dorsal y las Redes de Transporte Regional asociados a la conectividad en favor de las Instituciones Públicas es igual a cero. Sin embargo, es importante indicar que el PRONATEL no ha adoptado dicha interpretación, toda vez que a través de la Carta N° 433-2022-MTC/24.07, el PRONATEL comunicó a América Móvil Perú S.A.C. que los Proyectos Regionales no se encuentran exceptuados de realizar dicho pago. Por tal razón, en tanto la interpretación de la aplicación del costo cero difiera entre las Entidades del Sector de Telecomunicaciones, no debe retirarse dicho monto de los costos asociados a la tarifa.

2.- El OSIPTEL cuenta con información parcial en referencia a algunos Proyectos Regionales, lo cual genera un análisis impreciso de la situación actual. En ese sentido, no se puede precisar que existen ganancias por la ejecución y operación de los Proyectos Regionales, toda vez que a la fecha, habiendo transcurrido veintiún (21) meses de Operación del Proyecto Regional Lima el estado actual implica que:

- Por las condiciones del proyecto respecto a la forma de desembolso, no se recibe el subsidio completo sino se ejecuta en cuotas que se devengan a lo largo del contrato, por lo cual el Proyecto Regional Lima se encuentra en pérdida a la fecha, tal como se viene informando al PRONATEL en los flujos de caja semestrales.



	<ul style="list-style-type: none">- Se sigue operando una Red de Transporte a pesar de haber culminado el Periodo Provisional, por cuanto no se ha determinado un operador de dicha red y no se culmina la transferencia de la misma a favor del MTC, no permitiéndose la comercialización de servicios a través de la misma, generándose gastos de operación y mantenimiento no contemplados.- No se reciben pagos por la prestación de servicios brindados a las Entidades Beneficiarias. En efecto, hasta la fecha el Gobierno Regional de Lima no paga los servicios que se vienen brindando a las instituciones abonadas obligatorias de su ámbito, desde el mes de abril del año 2021. De igual manera, no ha sido posible obtener la suscripción del Contrato de Abonados por parte de Entidades Beneficiarias que a la fecha cuentan con servicios, como es el caso del MININTER y por tanto tampoco hay pago por los servicios que se vienen brindando. Por ello, si se aplicara el mismo trato que a los demás abonados, los servicios de telecomunicaciones brindados se encontrarían suspendidos por falta de pago; sin embargo, se ha continuado brindando el servicio a fin de no generar un incumplimiento contractual con el PRONATEL. <p>3. Las condiciones del servicio a brindar en las Instituciones del Estado cuentan con costos adicionales establecidas en el Contrato de Financiamiento del Proyecto Regional Lima, lo cual eleva el costo de mantenimiento del servicio, tales como:</p> <ul style="list-style-type: none">- Especificaciones técnicas especiales para la adquisición del CPE- Mantenimientos y supervisiones periódicas propias del CPE que deben ser asumidos al costo del servicio <p>4. En virtud de ello, reiteramos al OSIPTEL realizar las diligencias correspondientes a fin de considerar la situación actual de los Proyectos Regionales en la evaluación para determinar las tarifas tope del servicio de acceso a Internet para instituciones públicas, correspondiente a los Proyectos Regionales.</p>
--	---



Artículo 2.- Establecer la tarifa tope del servicio de acceso a Internet para abonados distintos a las instituciones públicas, correspondiente a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral, en los siguientes términos:

Proyecto Regional	Velocidad de descarga contratada (Mbps)	Renta mensual (S/ sin IGV)
Todos los Proyectos Regionales	12	31.73

Con respecto al establecimiento de las tarifas tope del servicio de acceso a Internet para abonados distintos a las instituciones públicas, correspondiente a los Proyectos Regionales de Banda Ancha y Conectividad Integral, presentamos los siguientes comentarios:

Es necesario que la metodología a evaluar sea en base a costos y no a una tarifa tope bajo un enfoque de demanda debido a los siguientes motivos:

1. La tarifa tope del servicio de acceso a Internet para hogares correspondiente a los Proyectos Regionales propuesta sería de S/. 31.73 por un plan de 12 Mbps, valor que es muy bajo y no cubre los costos derivados de la obligación de utilizar la RDNFO (USD 23, sin IGV) y del valor propuesto para la Red de Transporte de los Proyectos Regionales, conforme a la Resolución N° 218-2022-CD/OSIPTEL (USD 2.74, sin IGV). Considerando solo aquellos 2 costos se tiene un total de USD 25.74 por Mbps mensual. En ese sentido, para un Plan tarifario de 12 Mbps, el cual requiere de un flujo constante de al menos 1 Mbps, el valor de la tarifa del servicio de acceso a Internet no debería ser menor a los 25.74 USD mensuales.
2. Conforme a lo desarrollado en los comentarios al artículo N° 1 del Proyecto, el PRONATEL no está entregando el costo cero a los Proyectos Regionales, ya sea para las Redes de Transporte o la Red Dorsal Nacional de Fibra Óptica.
3. Existen obligaciones contractuales para los Proyectos Regionales, como del tipo de equipo CPE establecido en el Anexo 8-B de las Bases del Contrato de Financiamiento, en el que se indica que deben instalarse de manera gratuita hasta 5,384 de estos equipos para los contratantes de instituciones abonadas obligatorias y otros, lo cual se debe cumplir para brindar el servicio y por sus características específicas encarece los costos del servicio.
4. La fijación de tarifa para hogares fue establecida en el Contrato de Financiamiento, solo existen algunas condiciones por las cuales el subsidio se puede incrementar para el contratado. Por tanto, conforme fue desarrollado en los Comentarios Generales, no



	<p>existe seguridad jurídica frente al Contrato de Financiamiento suscrito, toda vez que los términos del contrato se encuentran siendo modificados unilateralmente por parte del Estado Peruano.</p> <p>5. Sin perjuicio de lo anterior, en caso el OSIPTEL pretenda condicionar la tarifa en base a la necesidad de la población, se requiere realizar una reducción de costos derivados de las obligaciones contractuales establecidas para los Proyectos Regionales, a fin que sea posible una reducción de costos.</p> <p>En virtud de ello, reiteramos al OSIPTEL realizar las diligencias correspondientes a fin de considerar la situación actual de los Proyectos Regionales en la evaluación para determinar las tarifas topes del servicio de acceso a Internet correspondiente a los Proyectos Regionales.</p>
--	--